

LOS QUE APOYARON

REFLEXIONES Y NUEVAS EVIDENCIAS SOBRE EL APOYO DIFUSO A LA DICTADURA MILITAR EN SU PRIMERA ETAPA (1976 - 1978)

THOSE WHO SUPPORTED: REFLECTIONS AND NEW EVIDENCE ON DIFFUSE SUPPORT
FOR THE MILITARY DICTATORSHIP IN ITS FIRST STAGE (1976 - 1978)

Daniel Lvovich¹

Palabras clave

Dictadura,
Consenso,
Apoyo difuso

Recibido

5-2-2020

Acceptado

1-8-2020

Resumen

El objetivo de este artículo es reflexionar y brindar nuevas evidencias empíricas que den cuenta del problema del acompañamiento brindado por amplios sectores sociales a la dictadura militar argentina en sus primeros momentos, entre el año 1976 y 1978. La afirmación sobre la existencia de amplias franjas de la población que dieron su respaldo a la dictadura militar no resulta en absoluto una novedad. Por ello la intención de este texto no es proponer una hipótesis nueva al respecto, sino brindar una reflexión conceptual sobre esta siempre compleja problemática, sistematizar la información disponible y brindar nuevas evidencias empíricas, sobre la base de fuentes estatales y norteamericanas, que permitan precisar las características y los alcances del fenómeno en cuestión.

Key words

Dictatorship,
Consensus,
Diffuse support

Received

5-2-2020

Accepted

1-8-2020

Abstract

This article's aim is to reflect and provide new empirical evidence that accounts for the accompaniment's problem provided by broad social sectors to the Argentine military dictatorship in its early stages, between 1976 and 1978. The statement about the existence of population broad sectors that gave their support to the military dictatorship is not a novelty at all. So the this text's intention is not to propose a new hypothesis about it, but to provide a reflection conceptual on this always complex problem, systematize the available information and provide new empirical evidence, based on state and North American sources, that allow to specify this phenomenon's characteristics and scope.

INTRODUCCIÓN

La dictadura que se instauró el 24 de marzo de 1976 y perduró hasta fines de 1983 desplegó sobre una parte de la población un sistemático y planificado método represivo que adquirió la forma de terrorismo de Estado, adoptó unas políticas económi-

1 Universidad Nacional de General Sarmiento, Instituto del Desarrollo Humano. Dirección postal: Juan María Gutiérrez 1150, 1613 Los Polvorines, Buenos Aires, Argentina. C. e.: dlvovich@ungs.edu.ar.

cas y sociales regresivas que provocaron el abandono de la industrialización sustitutiva y promovieron la concentración de la economía y el predominio del sector financiero; provocó un marcado retroceso en la casi totalidad de los indicadores sociales, causó un inédito endeudamiento externo que condicionaría el futuro del país y, en su ocaso, embarcó a la Argentina en una guerra en la que no existía posibilidad alguna de victoria, y en la que perdieron su vida centenares de jóvenes.

Las decisiones políticas de este régimen fueron tomadas por las élites militares y civiles que lo encabezaban, y suya es la responsabilidad por las políticas públicas y la represión clandestina que se desarrollaron en esos años. Esa responsabilidad fue en ocasiones sólo de naturaleza política, pero en muchos casos –sobre todo en lo relativo a la represión– también de naturaleza criminal. Se podría extender esta responsabilidad a otras elites –básicamente empresariales y eclesiásticas– que acompañaron, aconsejaron y promovieron las políticas del régimen. Y no podrían dejar de incluirse en esta enumeración a los periodistas, dueños de medios de comunicación e intelectuales que legitimaron la dictadura, participaron de sus tácticas de desinformación y contribuyeron a promover, naturalizar u ocultar la violación sistemática de los derechos humanos.

La investigación histórica y la judicial han examinado en detalle el comportamiento de estos sectores. En nuestra indagación buscamos considerar, en cambio, la población que no formó parte del régimen, los amplios sectores sociales que fueron objeto de las políticas de la dictadura sin contar con la posibilidad de incidir en las decisiones del gobierno. Nuestra pregunta no se dirige –no podría dirigirse– a la responsabilidad de estos sectores. Este es un punto que los distingue con claridad de aquellos que detentaban el poder político y económico. La pregunta que formulamos tiene que ver, en cambio, con el campo de las *actitudes sociales*. Esta interrogación encierra una enorme complejidad, ya que el conjunto de estas actitudes configura una gama –desde la absoluta resistencia hasta la complicidad– en la que, en general, predominan los grises. Por supuesto, la cuestión acerca de las relaciones entre dictadura y sociedad no puede responderse sin atender centralmente a los modos en que las políticas estatales fueron recibidas y procesadas por las distintas clases sociales y según criterios etarios, de género y regionales, además de las distintas identidades políticas de la población.

Por otra parte, nunca puede considerarse a un gobierno –y menos a la fragmentada dictadura argentina– una unidad, con lo que la pregunta debe refinarse para atender a los distintos aspectos del vínculo entre dictadura y sociedad. Cómo fueron percibidas la represión, las políticas económicas, las sociales y laborales, la censura, etc. son las preguntas particulares en que se puede descomponer el gran interrogante acerca tal vínculo. Y a la vez, la dimensión temporal resulta fundamental, ya que las actitudes de la población se fueron transformando con el propio devenir de la dictadura.

Las características de las dictaduras en el poder definen el tipo de consenso que requieren de la población. En la experiencia europea, la búsqueda del consenso activo –aquel en el que el apoyo al régimen se manifiesta públicamente a través de la movilización y la participación– resulta un rasgo distintivo de los fascismos; otros regímenes

autoritarios y fuertemente represivos, como el franquismo, buscaban alcanzar un consenso pasivo. (Saz 2004, p. 180).

Sin embargo, tampoco esta última noción está exenta de problemas. Podemos aproximarnos al concepto de consenso pasivo pensándolo como el resultado de la pasividad política y social y de la despolitización, elementos básicos para la pervivencia de los regímenes dictatoriales (de Riquer 1990, p. 180). Guillermo O'Donnell (1997, p. 83) ha señalado que, en los regímenes burocráticos autoritarios, la dominación económica y la coacción tienden a acercarse de manera transparente una a otra, reduciendo la posibilidad de generar consenso y legitimación. Aunque las dictaduras inviten a la participación, sostiene, la eliminación de la ciudadanía implica que “dicha participación sólo puede ser la aprobatoria contemplación de las tareas que emprenden las instituciones estatales”. En estas condiciones, a lo más que se puede aspirar es al consenso tácito. Es decir, despolitización, apatía y refugio en una cotidianidad altamente privatizada. Sin embargo, resulta muy improbable que el historiador logre diferenciar el consenso tácito que supone aprobación de las prácticas estatales de la aceptación pasiva de sus políticas debido al terror o la resignación fundada en la falta de expectativas razonables de cambio. De tal modo, la falta de manifestaciones de oposición o resistencia no puede ser sencillamente equiparada a un consenso tácito motivado por la aprobación de las políticas del régimen.

Ha sido señalado que los modos más activos de consenso y las formas que asumió la complicidad resultan claramente identificables sobre todo en los casos de personas con una activa participación pública y de instituciones. En cambio, en relación a las percepciones de los actores individuales, Philippe Burrin (1988, p. 625) ha sostenido que el término ‘consenso’ simplifica la complejidad de las actitudes hacia el poder, que habría que situar en una escala en torno a dos nociones: la aceptación y el distanciamiento. La primera comprendería la resignación, el apoyo y la adhesión; la segunda, la desviación, la disidencia y la oposición. Lo más común y frecuente en la realidad es encontrar en un mismo individuo una mezcla de varias de estas actitudes.

Nociones como aceptación o adaptación han demostrado resultar más fértiles que las miradas dicotómicas, proveyendo una perspectiva diferencial para pensar el problema de las actitudes sociales. El propio Burrin ha propuesto, para el caso de la ocupación nazi de Francia, el concepto de adaptación, que consideramos resulta pasible de ser adoptado para el análisis de sociedades gobernadas por dictaduras.² Philippe Burrin (2004, pp. 13-15 y 486-487) sostiene que la acomodación surge de la necesidad de ajustar la conducta a las circunstancias, negociando necesariamente los límites y los compromisos que cada individuo estaba dispuesto a asumir. Para ponderar la naturaleza de esa adaptación, el autor considera, en un extremo, el sentido de la coacción que obliga a aceptar una situación dada y, en el otro, la convicción ideológica o el interés material que pueden motivar la participación activa. De tal modo, existe una adaptación estructural, de carácter necesario e inevitable, y formas de adaptación voluntaria derivada de

2 Un ejemplo de esta adaptación en: Patto Sa Motta 2016.

la conveniencia o la convicción política. Pierre Laborie (2015, pp. 32- 33) ha complejizado esta perspectiva, al proponer que la adaptación supone una lógica particular de los comportamientos, en la que las estrategias de preservación, las prácticas de simulación y la importancia de las expectativas en las representaciones del futuro resultan fundamentales. Dada esta complejidad, resulta ineludible renunciar a las perspectivas binarias para analizar las formas intermedias entre el consentimiento y la insumisión. En una perspectiva similar, Luis Passerini (1987, pp. 141-142) destacó que la aceptación no implica necesariamente apoyo ni consenso, sino que se trata de la adaptación cotidiana a las demandas del régimen, decidiendo en cada ocasión que es oportuno y tolerable aceptar o rechazar. Podemos pensar, por lo tanto, para el caso argentino, en una gradación en cuyo extremo ubicamos el entusiasmo político ante el advenimiento del régimen dictatorial y, en el otro, la adaptación resignada y aliviada ante el final de una etapa política considerada intolerable. Este heterogéneo conjunto tiene en común el hecho de haber brindado formas de apoyo –necesariamente difuso dada la inexistencia de canales formales de expresión política– a la dictadura y, más precisamente, a los elementos represivos que, aunque la precedieron, se multiplicaron enormemente desde marzo de 1976.

Quizás la naturaleza ambigua y compleja de estas disposiciones hayan logrado ser retratadas con sutileza por el filósofo Bernard Henry Lévy, quien visitó la Argentina en 1978, tras lo que publicó una nota con sus impresiones en un medio norteamericano. Cuenta en ella distintas historias de desapariciones y manifiesta que en Buenos Aires “la gente está asustada, asustada de sí misma, asustada de otros, asustada de hoy y de mañana. Es un miedo indefinible. Sin un objeto o una ‘razón’ precisos, como un cáncer que los corroe, que deforma sus cuerpos y caras.” Sin embargo, señala que el terror en Argentina no es tan masivo y evidente como es visto desde afuera, sino que conforma un sistema infinitamente más difuso, refinado y oculto. Aunque recoge testimonios sobre torturas y otras formas de violencias, Bernard Henry Lévy afirmaba “... es raro que alguien quiera hablar con usted de manera espontánea. Es difícil plantear el tema aun con las mentes más abiertas. *No, Yo no se nada. No quiero hablar sobre eso*”. Encuentra así “una determinación a olvidar, la pasión por la ignorancia. Eso es lo que más me llamo la atención en los hombres y mujeres que entreviste. Y es verdad para todos ellos, para los Videlistas y para los opositores, los jóvenes y los viejos, los intelectuales y los más simples”³

EL DEBATE HISTORIOGRÁFICO

En las últimas décadas, diversos autores han afirmado que la dictadura instaurada en Argentina en 1976 logró alcanzar, en sus primeros años, formas significativas de respaldo social. Entre las explicaciones más clásicas, se encuentra la de Hugo Quiroga, quien afirmó que el sistema político argentino funcionó desde 1930 a través de una articulación que combinó en su estructura los gobiernos militares con los gobiernos

3 B. Levy, 1978. Argentina Today II, The People are Afraid. *The New Republic*, 17 de junio.

civiles. Así, la sociedad argentina organizó un sistema político carente de continuidad institucional, en el que la presencia del poder militar se convirtió en una constante. De tal modo, dos polos antagónicos, el democrático y el autoritario, coexistieron en el interior de un mismo sistema político, que toleró una alternancia del poder entre las fuerzas civiles y militares. Las Fuerzas Armadas compitieron así por el poder en la vida pública frente a los partidos políticos, como una fuerza política estatal. En consecuencia, lo que legitimó la dominación militar fue el funcionamiento de un

...sistema político particular que incorporó en su interior a las Fuerzas Armadas como un componente esencial y permanente. En otras palabras, *el sistema político opera como modo de legitimación de la dominación militar*. La 'pretorianización' del sistema político ha incidido en la conformación de una *cultura política* particular entre los argentinos. (Quiroga 1994, p. 39)

Este autor afirma que la intervención militar de 1976 fue legitimada por la casi totalidad de las formaciones políticas mediante el reconocimiento del papel de las FFAA en la "lucha contra la subversión", ya que "esa fue la legitimidad de origen permanentemente invocada por la administración *de facto*" (Quiroga 1994, p. 492).⁴

Tales actitudes, en la perspectiva de Quiroga, no fueron sólo patrimonio de los partidos políticos, ya que entiende que la falta de fidelidad es también imputable a la mayoría de los ciudadanos que buscaron, en la dominación militar, fórmulas alternativas de legitimidad. En los primeros años del régimen militar, más allá de los esfuerzos de las Fuerzas Armadas para legitimar su intervención, fueron las condiciones políticas existentes durante el gobierno de María Estela Martínez las que legitimaron formalmente la intervención militar. Frente a la crisis del tercer peronismo, afirma Quiroga (1994, p. 36): "Una parte de la opinión pública esperó deseosa la intervención y la otra, mayoritaria, resignada". De tal modo, ante el golpe de 1976, un sector considerable de la población manifestó, "pasiva y silenciosamente, su creencia en que la necesidad de recuperar un orden social dañado sólo se podría encontrar en el marco de la dominación militar". Sin embargo, el régimen militar de 1976 no se apoyó en la conquista de una nueva forma de legitimación, sino en la crisis de legitimidad del régimen civil precedente. También Juan Corradi (1996, p. 89) señaló, en un sentido similar, que mientras los grupos dominantes buscaron en 1976 dar prioridad al restablecimiento del monopolio de la coerción, la extrema fragmentación y anomia que caracterizaron al período anterior generaron en los grupos subordinados, y en particular en los sectores medios, "una demanda primitiva de orden y una disposición generalizada a suscribir un pacto hobessiano o, por lo menos, a respaldar la adquisición enérgica de poder soberano por parte de dictadores". Vicente Palermo y Marcos Novaro (2003, p. 25) consideran, en una perspectiva similar, que fue el contraste con los últimos años de gobierno democrático el que permitió a la dictadura construir cierta legitimidad inicial gracias al apoyo de una sociedad que suponía que ningún gobierno podría ser peor que el derrocado y otorgó al recién instalado un consenso "difuso y reactivo". Las demandas de

4 A conclusiones similares han arribado M. A. Yanuzzi (1996) y A. Pucciarelli (2004).

orden y gobierno que se habían acumulado desde 1975 dieron paso a "... una sensación de alivio en sectores sociales que excedieron largamente a los grupos, a esa altura ya bastante numerosos, activamente movilizados a favor del golpe". Aunque los autores destacan la muy diversa recepción del golpe, en un arco que va desde la satisfacción por la restauración de la autoridad hasta el terror ante las persecuciones, señalan que, en 1976 y por varios años, "una parte considerable de la sociedad y de todas las clases sociales vio en la pérdida de la democracia un precio no muy elevado a pagar para poder vivir más tranquilos". En un difundido "anestesiamiento moral" muchos estaban dispuestos a aceptar un grado importante de violencia ilegal para recuperar la tranquilidad. Y en el "núcleo social procesista, fuera del gobierno pero ciertamente dentro del régimen, un conjunto de civiles y militares, laicos y sacerdotes, hombres y mujeres de todas las condiciones y profesiones dio su consentimiento a la vasta operación de represión ilegal" y una porción significativa de las clases medias y bajas aceptaron la "conveniencia" de esa modalidad represiva (Palermo y Novaro 2003, pp. 128-130)

Como es bien sabido, los planteos de Guillermo O'Donnell brindaron intuiciones muy significativas sobre la naturaleza del control dictatorial basado en la existencia de una sociedad que se patrulló a sí misma, refiriéndose a un grupo amplio de personas que voluntariamente "se ocuparon activa y celosamente de ejercer su propio *páthos* autoritario. Fueron *kapos*⁵ a los que, asumiendo los valores de su (negado) agresor, muchas veces los vemos yendo más allá de lo que el régimen les demandaba", ejerciendo la vigilancia sobre el vecino y la autocensura (O'Donnell 1984, p. 18) El politólogo intentó discutir algunos aspectos de la vida cotidiana en Argentina entre 1976 y 1980, como anticipo de un libro que se había propuesto escribir sobre el cotidiano en Buenos Aires en los años más duros de la dictadura, empresa que finalmente no concretó. Para ello desarrolló una rudimentaria encuesta, adaptada a las condiciones de la dictadura.⁶ En su óptica, desde el aparato de Estado se despojó a la población de los atributos de la soberanía y en los contextos de la cotidianidad se buscó llevar adelante un proceso de sometimiento e infantilización, contracara del refuerzo de la autoridad de los que tenían "derecho a mandar" en la escuela, el trabajo, la familia o el espacio público. En las esferas micro y macro, se buscó la aceptación de la idea de que el mando más despótico estaba hecho para el bien de los que obedecían. El gobierno, sostiene el autor, tuvo considerable éxito en esta empresa, no sólo por el sometimiento que obtuvo el régimen, sino por el despliegue de las fuerzas autoritarias en la sociedad. Una enor-

5 En referencia a los prisioneros de los campos de concentración nazis que ocuparon cargos administrativos o de vigilancia menores.

6 Guillermo O'Donnell y su esposa Cecilia Galli realizaron lo que denominaron una "proto investigación" sobre el cotidiano en Buenos Aires, entrevistando a personas de diversos sectores y actividades a los que no les generaba temor interrogar; observaron instituciones educativas y organizaciones profesionales, leyeron y escucharon los discursos de los prisioneros del régimen, y formularon preguntas -aprovechando el acento extranjero de Cecilia Galli - a personajes de la calle porteña. La muestra así obtenida no alcanzaba pretensión alguna de representatividad, aunque sin duda constituye en nuestros días un elemento muy útil para la comprensión del período.

me mayoría de los entrevistados por O'Donnell, de muy diversas posiciones sociales y opiniones políticas, contrastaban favorablemente el "orden" vigente en 1979 con el "caos" de los años anteriores a 1976. Aunque muchos entre ellos estaban descontentos con distintos aspectos de la política gubernamental –en particular con las políticas económicas–, en la medida que la visión de los sujetos continuaba atrapada en aquel dilema "caos-orden", continuaban considerando aceptables las orientaciones generales del régimen militar. Tras los años de intensa movilización política de los primeros años setenta, muchos estaban predispuestos a lo que la represión y la propaganda dictatorial buscaban: un fuerte viraje hacia la privatización de las vidas, una generalizada aspiración a la reducción de la incertidumbre en la vida diaria y la aceptación del discurso que afirmaba, durante los años precedentes al golpe, que los patrones de autoridad, en todos los contextos, habían llegado a un punto de intolerable desorden. De este modo, en esta perspectiva, es la recuperación de cierta "normalidad" en la vida cotidiana –normalización por la que amplísimos sectores estuvieron dispuestos a pagar el costo de una marcada reducción de la actividad pública y hasta de una renuncia a amplias cuotas de autonomía personal– por contraste con el período anterior, la que marcaría el tono de la explicación. La excepcionalidad del régimen radicaba no sólo en el enorme despliegue de la violencia física, sino en el del propósito de modificar radicalmente las relaciones de autoridad en la sociedad, a través del

...sistemático, continuado y profundo intento de penetrar capilarmente en la sociedad para también allí, en todos los contextos a que la larga mano de ese gobierno alcanzaba, implantar el ORDEN y la AUTORIDAD; ambos calcados de la visión radicalmente autoritaria, vertical y paternalista con que el propio gobierno –y el régimen que se intentó implantar en sus momentos más triunfales– se concebía a sí mismo. (O'Donnell 1984, p. 14)

Por su parte, Gabriela Águila (2008) ha demostrado que, en Rosario, la mayor parte de los sectores influyentes en la opinión pública local –como los medios de comunicación, organizaciones empresarias e intermedias, Iglesia y algunos dirigentes políticos– expresaron visiblemente su apoyo al nuevo régimen y sus objetivos, pero que, excediendo estos límites, "algunos sectores de la ciudadanía exhibieron comportamientos que difícilmente pueden ser asimilados con la apatía o la indiferencia", ya que –basándose en el análisis de diversas movilizaciones callejeras– sostiene que "las manifestaciones de apoyo al régimen o a algunos de sus representantes más conspicuos, que se registraron en distintos momentos (...) ingresan en un registro que bien podría situarlas como expresión de un consenso "efectivo" o "activo." Otros autores, como Emmanuel Kahan, han destacado la noción de normalidad en la vida de las instituciones judías durante la dictadura, menos como expresión de consenso social explícito que como expresión de continuidad de la vida social y cultural regular al margen del desarrollo del terror de Estado. En su investigación sobre la experiencia judía durante la dictadura militar, este autor señala que, junto al alto número de víctimas de la dictadura militar de dicho origen y a las acusaciones de antisemitismo que recibió el gobierno militar, no pueden dejarse de consignar las dimensiones de normalidad y

floreamiento de muchas instituciones israelitas, características que no sólo son advertidas por el historiador, sino que habían sido destacadas por los actores del período (Kahan, 2014). No se trataba ello de una manifestación de adhesión ni conformismo, sino de la constatación de que existieron espacios –que incluso albergaron iniciativas culturales alternativas– que se desarrollaron más allá de las referencias a la adhesión o la oposición a las políticas estatales. Una serie incipiente de trabajos han mostrado, por último, aceptación de las perspectivas del régimen por parte de miembros no politizados de la clase obrera (Bretal 2019, Moriconi 2019).

Por su lado, Julia Risler (2018) ha mostrado que el régimen militar desarrolló una sistemática estrategia de comunicación y acción psicológica para extender su aceptación social. El desarrollo de campañas en los medios de comunicación, la recusación en tono nacionalista de las denuncias internacionales de las violaciones a los derechos humanos como una “campaña antiargentina”, el aprovechamiento de los éxitos deportivos de 1978 y 1979 se cuentan entre las herramientas que empleó la dictadura.

El conjunto de estas aproximaciones resulta sumamente valioso y ha permitido desarrollar una perspectiva matizada sobre las actitudes sociales del período. A estos estudios se suma un grupo de investigaciones sobre la vida cotidiana en dictadura que, aunque comparten problemas metodológicos derivados de considerar el testimonio como un vehículo diáfano para acceder a las ideas y representaciones que los entrevistados tenían en el pasado, indican la existencia de un sector de la sociedad que avaló el golpe en sus momentos iniciales. Ello se debió, en buena medida, al contraste con el gobierno de Isabel Perón –con su crisis institucional y económica, marcado autoritarismo, exacerbada represión del conflicto social y violencia estatal, paraestatal y de los grupos que abrazaron la vía armada– que organizó una compartida percepción social que explica que se haya recibido el golpe del 24 de marzo con alivio (Lvovich, 2017).

Aunque, como vemos, el golpe había encontrado un principio inicial de legitimación, no logró organizar un consenso que garantizara su perdurabilidad, debido a que las disputas internas del régimen impidieron que, hasta el año 1980, el gobierno militar desarrollara una estrategia de diálogo con los partidos políticos y las organizaciones sociales que le permitiera tender puentes hacia distintos sectores de la sociedad. Las políticas económicas de Martínez de Hoz minaban, a la vez, el terreno para encontrar principios de legitimidad suficiente en los planos económico y social, contrastando con otras dictaduras latinoamericanas. De hecho, en los primeros años del régimen militar, las políticas económicas serían objeto de críticas hasta por parte de sectores que brindaban su más amplio apoyo a la dictadura.

NUEVAS EVIDENCIAS

LA INFORMACIÓN DE LA INTELIGENCIA ESTATAL

Pese a sus enormes méritos, la bibliografía relevada no cuenta en su mayor parte con una base empírica que dé cuenta de los comportamientos y las actitudes de conjuntos

sociales amplios, que permitiría avanzar en los análisis acerca de la extensión social del consenso, aceptación o apoyo difuso al régimen en sus primeros años. Sin embargo, en los últimos años contamos con una serie de informaciones producidas contemporáneamente a los acontecimientos que nos permiten aproximarnos de otros modos al fenómeno de la adhesión a la dictadura. Un conjunto de estas fuentes fue producido por el propio estado dictatorial, que tuvo una preocupación constante para conocer la opinión de la población, para lo que elaboró una estructura específica de recolección permanente de información. Los informes de la situación psicosocial realizados para conocer las opiniones y las actitudes de la población eran elaborados desde 1976 por la Subsecretaría de Planeamiento de la Secretaría de Información Pública de la presidencia de la Nación (SIP). Esta agencia estatal elaboraba anualmente los cronogramas de investigaciones sociales, que incluían un plan de sondeos y encuestas a realizar durante todo el año, los cuales eran aplicados tanto por la SIP como por la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). La SIP realizaba sondeos mensuales de carácter reservado y encuestas especiales a través de la Dirección General de Inteligencia Psicosocial y del Centro de Investigación Psicosocial. Los sondeos mensuales se realizaron con el objetivo de relevar la opinión pública sobre temas vinculados al contexto social, económico y político. Las encuestas, en cambio, suministraron información sobre las opiniones y las actitudes de los encuestados en relación a diversas problemáticas, sobre todo referidas a la imagen del gobierno, su política económica y el rol de las FFAA. Estas encuestas podían ser realizadas a nivel nacional o sobre públicos específicos, como el universitario o dirigentes políticos (Risler 2018, pp. 161 y ss). Por su parte, la SIDE efectuaba sondeos diarios y quincenales, en distintas localidades, abordando temáticas específicas o construyendo un panorama informativo de temas más generales. Su objetivo era realizar lo que denominaban una indagación motivacional. La muestra era seleccionada de acuerdo a un criterio psicosocial enmarcado en la búsqueda de respuestas sobre determinadas temáticas o tópicos. A través de la realización sistemática de estos sondeos de opinión pública, la SIDE obtenía la producción continuada de informes de inteligencia sobre la ciudadanía.

Lamentablemente, el conocimiento que tenemos sobre los resultados de estos informes y encuestas es muy fragmentario, ya que sólo se ha logrado acceder –y de manera parcial– a dos de ellos.

El primer caso es de fines de marzo de 1976, cuando Ejército publicó la “Orden de Operaciones 2/76: pasaje a la fase de consolidación”. En un anexo de inteligencia, se exponían los resultados de un análisis sobre la situación psicosocial de la población realizado dos días después del golpe. Se afirmaba allí que la ciudadanía había retornado a su ritmo habitual “y experimenta una sensación de satisfacción por el hecho acontecido, advirtiéndose a la vez una gran inquietud para que este nuevo Gobierno no constituya una nueva frustración”. El informe agregaba que la claridad de los comunicados y proclamas, los desplazamientos “no espectaculares” de tropas y las previsiones adoptadas “Han evidenciado una actitud inicial de aceptación de la población hacia el Proceso de Reorganización Nacional” (Risler 2018, pp. 107-108).

El segundo caso es el de una encuesta aplicada en la provincia de Tucumán a fines de 1976, que fuera analizada por Emilio Crenzel (2009-2010), y que ofrece resultados más precisos y matizados que el informe previo. El material al que accedió ese investigador es el "Informe básico de la encuesta de opinión pública número 4". Se trata de un informe anónimo en el que no se aclara la adscripción profesional de quienes lo elaboraron. Tampoco se consigna, en el material disponible, el modo en que se elaboró el trabajo y se seleccionó la muestra ni la manera en que se presentaron los encuestadores, ni está disponible el cuestionario utilizado. El trabajo hace referencia a sondeos previos realizados en el Gran Buenos Aires, Capital Federal y Córdoba, dando cuenta de la amplia cobertura territorial de estas investigaciones. El sondeo en Tucumán se realizó en la ciudad capital y en los departamentos Cruz Alta y Famaillá-Monteros. La investigación está organizada a partir de la relación entre categorías sociodemográficas y socioeconómicas seleccionadas como variables independientes y las "actitudes socio-políticas y las orientaciones de opinión pública" predominantes en la provincia de Tucumán, sintetizadas a través de varios "índices de actitudes" (Crenzel 2019/2010, p. 96). En relación a los datos que brinda el informe, la alta proporción de las respuestas agrupadas bajo la categoría "actitud indiferente" –desde el 15% en algunos casos hasta el 66% en otros– y los altos porcentajes que, frente a la pregunta por la "actitud" ante la "subversión", alcanza la categoría "no se detecta" son indicadores de las limitaciones de una encuesta realizada en tiempos dictatoriales.

Según Crenzel,

...el posible retraimiento de los consultados es una conclusión intuida por quienes elaboraron el informe al interpretar que un 31.8% de los entrevistados entre los que "no se detecta" una "actitud" ante la subversión rehúsan, a su vez, manifestarse con relación a su "actitud" ante el sindicalismo. (Crenzel, p. 102)

Los redactores del informe subrayaban que, dentro de parámetros de "alta hostilidad" y altas "actitudes indiferentes", los entrevistados del nivel socioeconómico más alto presentaban actitudes de mayor rechazo ante la "subversión" y que, los más pobres –sobre todo los desempleados de larga data– y los ocupados de carácter más estable presentaban mayor proporción de "actitudes favorables" y menor proporción de "actitudes hostiles", orientación que compartían también los entrevistados jóvenes y los de mayor nivel educativo. También respecto a la política económica y hacia el gobierno provincial, a mayor ingreso mensual total del hogar crecía la "actitud favorable" El informe finaliza con la observación de que, mientras las actitudes favorables superaban a las desfavorables hacia el gobierno provincial, con respecto a la política económica nacional las últimas superaban a las primeras.

Este podría ser un indicador de una temprana evaluación positiva de parte de la población tucumana con relación a la expresión que asumió la dictadura militar en la provincia y a su diferenciación respecto a la política implementada a nivel nacional. (Crenzel, pp. 103-104)

La única pregunta explícita de la encuesta expresaba: "¿Cómo juzga usted la acción de las Fuerzas Armadas cuando reprimen a la guerrilla?". Un 62.5% de los entrevistados

–principalmente de sectores altos– la juzgaba “correcta”, un 19% no emitía opinión –en particular los entrevistados más pobres–, el 10.5% la consideraba “excesiva / muy excesiva”, sobre todo entre los entrevistados de sectores medios y el 7.8% de los consultados la evaluaba como “débil / muy débil”. El informe no presentaba datos acerca de qué conocimientos tenían quienes respondieron la encuesta sobre las características, dimensiones y métodos que asumía la “represión a la guerrilla”, por lo que no es posible saber si las valoraciones involucraban la aprobación de elementos como el secuestro, la tortura y la desaparición de personas (Crenzel, p. 104).

De un modo menos sofisticado, también la policía de la Provincia de Buenos Aires, a través de su Dirección de Inteligencia (DIPBA), también recababa periódicamente informaciones acerca del estado de la opinión pública en su jurisdicción. El espionaje, el seguimiento, el registro y el análisis de la información para la persecución política e ideológica fueron las principales funciones de la DIPBA desde su creación en el año 1956 hasta su disolución en el año 1998. La información provenía de las investigaciones realizadas por los agentes en los distritos bonaerenses a través de una extensa red de espías e informantes.⁷ El ejemplo al que accedimos es el del informe sobre el Partido de General Sarmiento de junio de 1978, que transcribimos parcialmente:

7 La acción de la DIPBA (y los registros en su Archivo) se extendió entre los años 1956 y 1998, pero la institución heredó documentos de otros organismos precedentes, como la Dirección de Orden Público o la Sección de Orden Social –sobre todo legajos referidos a aquellos considerados agitadores «maximalistas» o comunistas– que fueron incorporados a este nuevo archivo, los más antiguos de ellos fechados en 1934. El Archivo consta de alrededor de 4.000.000 de folios (además de cientos de casetes y videocasetes) organizados en 90 cuerpos de estanterías con 600 estantes que ocupan cerca de 336 metros lineales. Es un fondo orgánico y cerrado que, como la mayoría de los archivos de los servicios de inteligencia, está organizado en torno a un gran fichero, cuyas fichas remiten a los expedientes o legajos que contienen la información sobre personas y acontecimientos. Su unidad documental son los legajos, que se distribuyen en «Factores» (gremial, político, estudiantil, religioso) y «Mesas» («comunismo», «delinuentes subversivos», etc.). El organismo funcionó hasta 1998, cuando fue disuelto en el contexto de una reforma de la policía provincial. A fines de 2000, por Ley 12.642 de la Legislatura de la provincia de Buenos Aires, el archivo y el edificio donde funcionaba la DIPBA fueron transferidos a la Comisión Provincial por la Memoria (CPM); y en 2003 se dictó una ley que permitió la desclasificación de sus documentos y su apertura al público. Desde octubre de 2003, el Archivo está abierto para la averiguación de datos sobre los ciudadanos que fueron «fichados» por el organismo de inteligencia policial, para la provisión de documentación solicitada para las causas penales contra los perpetradores de delitos de lesa humanidad en los años dictatoriales y para la investigación histórica y periodística. Patricia Funes: «Secretos, confidenciales y reservados. Los registros de las dictaduras en la Argentina. El Archivo de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires», en Hugo Quiroga y César Tcach (comps.), 2006, *Argentina, 1976-2006. Entre la sombra de la dictadura y el futuro de la democracia*, Rosario: Homo Sapiens; e *idem*: «El historiador, el archivo y el testigo», en Jorge Cernadas y Daniel Lvovich, 2010, *Historia para qué. Revisitas a una vieja pregunta*, Buenos Aires: UNGS-Prometeo Libros, pp. 89-117. La CPM de la provincia de Buenos Aires es un organismo público extrapoder que funciona de manera autónoma y autárquica. Fue creada por resolución legislativa de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires núm. 2117 de 1999. Nació con el objetivo de desarrollar actividades de investigación y transmisión sobre las violaciones a los derechos humanos cometidas en la historia reciente de nuestro país, con la idea de incidir en las políticas públicas de memoria. Al respecto, véase <http://www.comisionporlamemoria.org/comision.php?a=34>.

Averiguaciones llevadas a cabo con el objeto de palpar la opinión de la población del Partido de General Sarmiento, en lo atinente a la gestión que lleva a cabo el Intendente Municipal Coronel (RE) Luis Antonio Ortelli, han permitido establecer:⁸ La población, en un principio vio con agrado la separación del anterior intendente, y la restauración de un sistema de orden, con el advenimiento de las autoridades militares. Pero poco a poco comenzaron a sentirse defraudados dado que no veían el empuje ni la concreción de obras que necesitaba la población. Asimismo, crea cierto malestar el aumento de los impuestos, a pesar de tener conciencia que lo recaudado volvería en obras para los habitantes, cosa que, según los mismos, no es así.⁹

Según el informante, las principales críticas a la gestión del Intendente se basaban en el mal servicio de recolección de basura en los barrios y zonas residenciales, la falta o mala calidad de las obras de pavimentación y las deficiencias en la atención sanitaria en los hospitales y salas de primeros auxilios del distrito.¹⁰

Como vemos, entonces, la simpatía inicial de la población local ante el golpe militar se vio erosionada por las ineficiencias de la gestión y la arbitrariedad del intendente.

En cuanto al origen de esta información, el informe solo indica "propios medios", lo que remite seguramente a las conversaciones mantenidas por el informante y al aporte de espías e informadores, pero no tenemos datos acerca de los núcleos de la población entre los que se recabaron estas opiniones.

LA INFORMACIÓN DE LAS FUENTES NORTEAMERICANAS

Otras fuentes relevantes para el análisis de las actitudes sociales en las distintas dictaduras del siglo XX es la provista por los informes diplomáticos que las embajadas enviaban a sus cancillerías. No se trata, obviamente, de fuentes imparciales, sino de testimonios informados que buscaban dar cuenta de un panorama completo sobre la base de conversaciones mantenidas con distintos actores nacionales y el análisis de la prensa y la información oficial. En el caso de la dictadura argentina instaurada en 1976, sabemos que la embajada norteamericana mantenía conversaciones con un amplio

8 Ortelli había asumido la intendencia *de facto* el 28 de abril de 1976 y permaneció en esa función hasta el 6 de noviembre de 1979. Guadalupe Ballester, "Asociacionismo y poder local: trayectorias y vínculos entre las asociaciones de General Sarmiento y el gobierno municipal (1973-1983)" en Daniel Lvovich (comp.), 2018, *Historias de/en General Sarmiento*, Buenos Aires: Ediciones UNGS.

9 Archivo DIPBA. Mesa A. Carpeta 9. Legajo n° 50, Antecedentes de Comuna. General Sarmiento, 14 de junio de 1978, folio 3.

10 *Idem*, folios 3-4. Dentro de la administración pública existen quejas contra "... el carácter egocentrista del intendente, su trato (como un militar a sus soldados) y la incoherencia en sus órdenes..." y no faltaban los señalamientos del aprovechamiento por parte de Ortelli de recursos públicos para su uso privado y las denuncias de corrupción contra varios de sus funcionarios. El intendente Ortelli, sostiene el informe, presionó al Secretario General del Sindicato de Obreros Municipales y lo amenazó "ya que en varias ocasiones le manifestó a viva voz 'lo voy a hacer levantar' o 'lo voy a hacer desaparecer'". La conclusión del informe es que "... la calificación de egocentrista y personalista dada al Sr. Intendente, la falta de coherencia en la política aplicada, el cuestionamiento sobre la honestidad y honorabilidad de sus colaboradores, hacen a la impopularidad del Gobierno Municipal" (*idem*, folios 5 y 8).

arco de actores sociales y políticos, que excluían a las organizaciones revolucionarias armadas y a la mayor parte del movimiento obrero. Con estos límites, consideramos que la información producida por la diplomacia norteamericana brinda elementos importantes para comprender las disposiciones de, al menos, una parte de la población durante los primeros tiempos de la dictadura militar.

Los análisis de las fuentes diplomáticas norteamericanas permiten seguir lo que, a sus ojos, fue el tránsito desde la marginalidad militar en el proceso político hasta la construcción de un consenso referido no sólo a su intervención, sino también a la represión ilegal. Desde la muerte de Perón en 1974, la diplomacia norteamericana seguía con atención la evolución de la crisis política argentina y había evaluado las posibilidades de una nueva intervención militar. Un estudio de inteligencia del Departamento de Estado del 17 de julio de 1974, que postulaba posibles escenarios, señalaba que los militares preferían permanecer en la periferia. Escarmentados por su experiencia de gobierno directo que habían desarrollado hasta las elecciones de 1973 "...saben que solo podrían gobernar con una severa represión".¹¹ Por ello, en estos informes se sostenía que sólo una catástrofe de grandes proporciones provocaría una nueva intervención militar.¹² Un año más tarde, y al calor del avance de la crisis, otro reporte de inteligencia del Departamento de Estado, fechado el 7 de agosto de 1975, señalaba que se había desarrollado una "tenue alianza" entre militares y sindicalistas sobre la base de su común oposición al "izquierdismo / terrorismo" y su compartida determinación de detener el poder de López Rega en el gobierno.¹³ En el reporte se sostenía que si una alianza militar sindical se alcanzara, gozaría del apoyo del resto del arco político argentino y de los grupos de poder económico, garantizándole un amplio consenso, pero que la "manifiesta incompetencia de los civiles" planteaba la perspectiva de un golpe militar.¹⁴ Ante ello, se postulaba que la resignación parecía ser el estado de ánimo mayoritario: "Esa posibilidad es bienvenida por pocos pero aceptada por casi todos como inevitable si la presente crisis no se soluciona".¹⁵ De este modo, la voluntad militar de evitar asumir directamente el gobierno no se atribuía a la postura mayoritaria del arco civil, sino a la falta de un apoyo unificado a la intervención por parte de las FFAA, a la memoria de los errores del gobierno militar de 1966-1973 y la comprensión de que un golpe haría a los militares responsables por resolver problemas complejos para los que

11 National Archive and Record Administration II (En adelante, NARA II), P-Reel Documents, Central Foreign Policy Files, documenting the period 1973 ? - 12/31/1979 - *Record Group 59, doc. 740078 - 0502*, p. 2. Todas las traducciones del inglés al español son del autor.

12 NARA II, P-Reel Documents, Central Foreign Policy Files, documenting the period 1973 ? - 12/31/1979 - *Record Group 59, doc. 740078-0905*, p. 5.

13 NARA II, P-Reel Documents, Central Foreign Policy Files, documenting the period 1973 ? - 12/31/1979 - *Record Group 59, doc 750134-1445*, p. 1.

14 NARA II, P-Reel Documents, Central Foreign Policy Files, documenting the period 1973 ? - 12/31/1979 - *Record Group 59, doc 750134-1445*, p. 3.

15 *Idem*.

no tenían una solución. La reluctancia e indecisión de los militares a actuar se debía también a que ello implicaría un baño de sangre y una severa represión.¹⁶

Ese mismo año, se reportaban las violaciones a los derechos humanos cometidas "...como parte de la campaña del gobierno argentino contra quienes se supone forman parte de la guerrilla o la apoyan", clasificadas en detenciones sin cargo, torturas y asesinatos. El reporte evaluaba que "Dado el momento político en que vive Argentina, pareciera que esas prácticas serán toleradas por el gobierno (y por muchos argentinos) como un expediente en la lucha contra el terrorismo".¹⁷

Estas fuentes norteamericanas permiten, como vemos, reforzar la idea acerca de la gestación de un extendido "consenso antisubversivo" durante los años del tercer peronismo, lo que implicó una extendida disposición a tolerar o aceptar las violaciones a los derechos humanos en la lucha contra las organizaciones revolucionarias (Franco, 2012).

Tras el golpe de estado, en abril de 1976, el embajador norteamericano en Argentina estimaba que el gobierno de Videla había tenido un buen comienzo, ya que había tomado el poder sin un baño de sangre y adoptado un rumbo moderado, "...por lo que se ganó el apoyo de la mayoría de los argentinos." El diplomático consideraba que debían entonces desarrollarse medidas de austeridad económica, pero sin alienarse el apoyo de la opinión pública, y derrotar al terrorismo evitando violar gravemente los derechos humanos y manteniendo la cohesión de las Fuerzas Armadas.¹⁸

A lo largo de 1976 y 1977, son múltiples las informaciones que dan cuenta tanto del apoyo al régimen militar cuanto de sus divisiones internas. En ese marco, se desarrolló lo que hemos denominado el *mito de Videla*, esto es, la creencia que el general Videla era un militar moderado en todos los planos, que no lograba controlar los elementos de ultraderecha civiles o de las Fuerzas Armadas que se suponía llevaban a cabo una represión ajena a la voluntad del presidente *de facto*, y cuya posición corría peligro ante la amenaza de los sectores más duros del ejército. Esta creencia tenía la consecuencia de inhibir formas mayores de denuncia u oposición, ya que se consideraba que podían debilitar la posición de Videla, que aparecía como la mejor opción disponible para un arco importante que incluía a los dos partidos mayoritarios, buena parte de la izquierda y un amplio sector del Movimiento por los Derechos Humanos, además de representantes católicos, judíos y protestantes.¹⁹

Ejemplos del respaldo al gobierno se encuentran en una comunicación de la embajada en Buenos Aires al Departamento de Estado del 7 de febrero de 1978, en el que se cita un informe de diciembre de 1977 de Emilio Daddario, presidente de la Asociación Ame-

16 *Idem*, p. 4.

17 NARA II, Aerograma de la embajada USA en Buenos Aires, 12 de febrero de 1975, -Reel Documents, Central Foreign Policy Files, documenting the period 1973 ? - 12/31/1979 - Record Group 59, doc .750034-1160, p. 1.

18 Mensaje de la embajada en Buenos Aires al departamento de Estado, abril de 1976, Document Number: 1976BUENOS02747.

19 Hemos desarrollado este tema en Lvovich 2020.

ricana para el Progreso de la Ciencia (AAAS en inglés), quien visitó la Argentina para interesarse por varios científicos presos y desaparecidos en el país. Daddario afirmaba que, aunque la situación de los derechos humanos distaba de ser feliz, “debemos asumir el hecho de que el gobierno está firmemente consolidado y cuenta con un apoyo substancial de la población”.²⁰ En agosto de ese año, en conversación con diplomáticos norteamericanos, el periodista Robert Cox, que había sufrido un arresto pocas semanas antes, afirmaba que el gobierno militar continuaba contando con un amplio apoyo.²¹

Analizando la percepción de las políticas norteamericanas en el Cono Sur, un memorando de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos señalaba en 1978 que, aunque era muy difícil obtener una lectura precisa de la reacción del público a la política de derechos humanos de los Estados Unidos, en los países de la región “La mayoría de los ciudadanos parece apoyar a los gobiernos militares; el resto no está preocupado por la política o está vinculado a una oposición declarada”. A juzgar por los comentarios de los periódicos y las conversaciones personales, la política de derechos humanos de Estados Unidos ha tenido poco impacto en la población general.²²

Por supuesto, el departamento de Estado no dejaba de notar también las manifestaciones de disconformidad u oposición. En un memorando del Departamento de Estado de noviembre de 1977, se señalaba que las políticas económicas del gobierno provocaron que el descontento haya aumentado, como lo anticipa una ola reciente de huelgas. El aumento del disgusto popular amenazaba con provocar más represión oficial.²³

La diplomacia norteamericana identificaba factores de oposición. La principal fuente de oposición, ya en 1977, era el movimiento obrero. “Existe una marcada hostilidad entre los trabajadores y los militares. Los trabajadores han desafiado a la junta a través de la inasistencia laboral, la lentificación del trabajo y los sabotajes.” El desafío de los trabajadores expresa una mezcla de cuestiones políticas y económicas: los trabajadores perdieron mucho poder adquisitivo, a la vez los líderes sindicales debían refrendar su liderazgo con escaso margen de maniobra.²⁴

El otro gran elemento opositor que preocupaba al gobierno era el movimiento de derechos humanos, a juzgar por la información sobre la prohibición a Las Madres de Plaza Mayo para realizar su vigilia semanal los jueves frente a la casa de gobierno en

20 <https://aad.archives.gov/aad/createpdf?rid=29706&dt=2694&dl=2009>.

21 <https://aad.archives.gov/aad/createpdf?rid=183440&dt=2532&dl=1629>. FM SECSTATE WASHDC TO AMEMBASSY BUENOS AIRES. Document Number: 1977STATE191385 12 agosto 1977.

22 Central Intelligence Agency. National Foreign Assessment Center. Intelligence Memorandum. Southern Cone perceptions of US Policies 6 November 1978. <https://www.dni.gov/files/documents/icotr/Argentina%20-%20Carter%20Memos.pdf>.

23 Memorando del Departamento de Estado, 19 de noviembre de 1977, p. 2, en Department of State Release of Documents on Argentina and the Latin American Region, 1977-1980, <https://archive.org/details/DepartmentOfStateReleaseOfDocumentsOnArgentinaAndTheLatinAmericanRegion1977-1980/page/n12>.

24 Central Intelligence Agency, Intelligence Memorandum, Argentina. Prospects for the junta. 22 de febrero de 1977, https://www.intel.gov/assets/documents/argentina/ADP_CIA.zip.

Buenos Aires. “Las manifestaciones aparentemente se habían vuelto demasiado grandes y potencialmente perturbadoras en el juicio de los funcionarios del gobierno”.²⁵

Sin embargo, hacia 1978 no dejan de encontrarse elementos de conformidad manifiesta con el régimen. La embajada de Estados Unidos en Buenos Aires informó en julio que, después de la final de la copa del mundo, unos seis mil jóvenes celebraron la victoria en Plaza de Mayo. Aunque el objetivo inicial de los organizadores permanece oscuro, la marcha pronto se convirtió en una demostración de apoyo popular al general Videla. Al principio, éste se resistió a aparecer en el balcón, pero cuando lo hizo fue aclamado. También fue vivado en la inauguración de la exposición rural, pocos días después.²⁶

Dos meses más tarde, el *Washington Post* afirmaba que muchos argentinos apoyaban la guerra antiterrorista desarrollada por los militares desde su regreso al poder en 1976, ya que en ese momento el país era un caos y el gobierno enfrentaba dos grupos guerrilleros. Pero las tácticas de la campaña –desapariciones, torturas, ejecuciones– preocupaban a los grupos de DDHH y los gobiernos occidentales.²⁷

Hacia 1979, en la perspectiva norteamericana, el extendido apoyo parecía haberse roto. A comienzos de ese año, un memorando del Departamento de Estado afirmaba que

Otros factores que disminuyeron las posibilidades de Videla de lograr reformas de derechos humanos en 1978 incluyeron su retiro en agosto como oficial en servicio y comandante del ejército, y un aumento gradual del desencanto militar y civil con el desempeño económico y político general de su gobierno.²⁸

Ese mismo año, la New York City Bar Association demandaba que los abogados y jueces argentinos tomaran un interés más activo en el retorno a la ley –criticando su escaso compromiso–, pero señalaba que la Iglesia y algunos elementos de la prensa se habían vuelto más abiertamente críticos del gobierno al tratar con los derechos humanos.²⁹

De este modo, las informaciones producidas por el gobierno de los Estados Unidos acerca del apoyo social al régimen y a su debilitamiento a partir de 1979 contribuyen a dar apoyatura a lo que ha sido señalado al respecto por la mayor parte de la bibliografía especializada, contribuyendo a reforzar sus argumentaciones.

25 Memorando del Departamento de Estado al Consejo de Seguridad Nacional, Assessment of Current Human Rights Situation in Argentina, 28 de febrero de 1979, en <https://www.dni.gov/files/documents/icotr/Argentina%20-%20Carter%20Memos.pdf>.

26 De embajada en Buenos Aires a Departamento de Estado. Document Number: 1978BUENOS05218, julio de 1978. El mismo cable informaba que en esa misma semana también hubo una misa en memoria de Perón seguida de un intento de marcha con unos 4.500 a 5.000 asistentes, la cual fue dispersada por la policía.

27 Argentine Describes Excruciating Pain of Torture, *The Washington Post*, 29/10/1978.

28 Departamento de Estado. Memorandum: Evaluation of Argentine Human Rights situation, 13 de febrero de 1979, en: Department of State Release of Documents on Argentina and the Latin American Region, 1977-1980, <https://archive.org/details/DepartmentOfStateReleaseOfDocumentsOnArgentinaAndTheLatinAmericanRegion%201977-1980/page/n12>.

29 Memorando del Departamento de Estado, 3 de agosto de 1979, <https://www.dni.gov/files/documents/icotr/Argentina%20-%20Carter%20Memos.pdf>.

A MANERA DE CONCLUSIÓN

Analizar las actitudes sociales de amplios colectivos resulta una tarea de una complejidad enorme, por lo que es imposible obtener respuestas cerradas y conclusivas. Podemos afirmar, sin embargo, que el recorrido historiográfico realizado y las nuevas fuentes puestas a consideración permiten postular la existencia de un extendido pero difuso apoyo a la dictadura militar en sus primeros años, incluyendo este acompañamiento diversas formas de aval a unas modalidades de represión desigualmente conocidas. Ello no puede ser considerado un consenso orgánicamente articulado, ya que los motivos para este difuso apoyo se inscriben en una gama que va desde el entusiasmo a la resignación o la rutinización de las intervenciones militares y la consiguiente represión. En el conjunto de las indagaciones y fuentes, el contraste con el gobierno de Isabel Perón adquiere un rol fundamental para explicar el extendido apoyo al régimen surgido del golpe de Estado.

También es posible sostener que, tal como muestran las fuentes de inteligencia y las norteamericanas, ese apoyo inicial pudo convivir con críticas a diferentes áreas de las políticas sociales, económicas y laborales, o diversas modalidades de ejercicio de la función estatal. Por último, las fuentes permiten corroborar las afirmaciones de que la dictadura fue acompañada con mayor contundencia por los sectores medios y las clases altas, mientras la clase trabajadora y otros sectores populares, que sufrieron fuertemente tanto los embates represivos cuanto las consecuencias de las políticas económicas de los primeros años dictatoriales, se mostraron desde temprano más distantes al régimen –como muestran, por ejemplo, los reportes diplomáticos estadounidenses del año 1977 que citamos en este artículo–, aunque no de un modo unánime. Se constata igualmente que la denuncia a la violación de los derechos humanos en la Argentina no constituyó, en los años analizados, una bandera que lograra aglutinar una oposición amplia al régimen dictatorial.

La diversidad de las modalidades de acompañamiento o rechazo, la existencia de diversas políticas o áreas que resultaban objeto de adhesión –mientras otras podían generar disidencias o simple indiferencia– y los cambios temporales en las actitudes sociales muestran que las nociones de consenso y oposición, si bien necesarias como punto de partida para cualquier análisis de la naturaleza que nos convoca, son insuficientes. Pensar en términos de escalas y grises entre la aceptación y el distanciamiento, atentos a la vez a las variaciones temporales y a la extrema complejidad de la vinculación entre individuos, grupos sociales y poder dictatorial, resulta una vía fructífera para intentar dar cuenta de la siempre elusiva problemática de las actitudes sociales.

BIBLIOGRAFÍA

ÁGUILA, G., 2008. *Dictadura, represión y sociedad en Rosario, 1976/1983. Un estudio sobre la represión y los comportamientos y actitudes sociales en dictadura*. Buenos Aires: Prometeo.

- BRETAL, E., 2019. *Obreros y obreras de Swift: la época de los ingleses, la época de los militares y la época del cierre*. Los Polvorines: Universidad Nacional de General Sarmiento.
- BURRIN, P., 1988. Politique et société: les structures du pouvoir dans l'Italie fasciste et l'Allemagne nazi. *Annales ESC*, vol. 43 n° 3, pp. 615-637.
- BURRIN, P., 2004. *Francia bajo la ocupación nazi, 1940-1944*. Barcelona: Paidós.
- CORRADI, J., 1996. El método de destrucción. El terror en la Argentina. En: H. QUIROGA & C. TCACH (comps.), *A veinte años del golpe. Con memoria democrática*. Rosario: Homo Sapiens, pp. 87-106.
- CRENZEL, E., 2009/2010. Una encuesta de opinión pública en Tucumán bajo la dictadura, Una aproximación indicial. *Telar. Revista del Instituto Interdisciplinario de Estudios Latinoamericanos*, año VI, n° 7-8, pp. 92-109. Tucumán.
- DE RIQUER I PERMANYER, B., 1990. Rebuig, passivitat i suport. Actituds polítiques catalanes davant el primer franquisme. En: F. BARBAGALLO et al., *Franquisme. Sobre resistència i consens a Catalunya (1938-1959)*. Barcelona: Crítica, pp. 179-193.
- FRANCO, M., 2012. *Un enemigo para la nación. Orden interno, violencia y "subversión", 1973 - 1976*. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
- KAHAN, E., 2014., *Recuerdos que mienten un poco. Vida y memoria de la experiencia judía durante la última dictadura militar*. Buenos Aires: Prometeo.
- LABORIE, P., 2015. Histoire, vulgate et comportements colectifs. En: P. LABORIE & F. MARCOT, *Les comportements collectifs en France et dans l'Europe allemande. Historiographie, normes, prismes, 1940-1945*. Rennes: Presses Universitaires de Rennes, pp. 25-38.
- LVOVICH, D., 2017. Vida cotidiana y dictadura militar en la Argentina: Un balance historiográfico. *Estudios Ibero-americanos. Programa de pos-graduação en Historia. PUC Rio Grande Do Sul*, vol. 43, n° 2. Disponible en <http://revistaseltronicas.pucrs.br/ojs/index.php/iberoamericana/article/view/25184>.
- LVOVICH, D., 2020. El mito de la moderación de Videla: extensión social y funciones de una creencia compartida. *Contemporánea, Historia y problemas del siglo xx*, vol. 12, pp. 155-174. Montevideo.
- MORICONI, M., 2019. Los trabajadores de la fábrica Jabón Federal en los años setenta: una reconstrucción histórica y diferentes narrativas. *Kamchatka. Revista de análisis cultural*, n° 14, pp. 437-467.
- NOVARO, M. & V. PALERMO, 2003. *La dictadura militar (1976-1983). Del golpe de estado a la restauración democrática*. Buenos Aires: Paidós.
- O'DONNELL, G., 1984. Democracia en la Argentina. Micro y macro. En O. OSZLAK (comp.), *"Proceso", crisis y transición democrática/1*. Buenos Aires: Centro Editor de América Latina.
- O'DONNELL, G., 1997. Tensiones en el estado burocrático - autoritario y la cuestión de la democracia. En: *Contrapuntos. Ensayos escogidos sobre autoritarismo y democratización*. Buenos Aires: Paidós, pp. 69-96.
- PASSERINI, L., 1987. *Fascism in Popular Memory. The Cultural experience of the Turin Working Class*. Londres & París: Cambridge University Press & Editions de la Maison des Sciences del' Homme.
- PATTO SA MOTTA, R., 2016. La estrategia de acomodación en la dictadura brasileña y la influencia de la cultura política. *Páginas. Revista Digital de la Escuela de Historia, UNR*, vol. 8, n° 17. Disponible en: <http://revistapaginas.unr.edu.ar/index.php/RevPaginas/article/view/222/278>.
- PUCCIARELLI, A., 2004. La patria contratista. El nuevo discurso liberal de la dictadura militar encubre una vieja práctica corporativa. En: A. PUCCIARELLI (comp.), *Empresarios, tecnócratas y militares. La trama corporativa de la última dictadura*. Buenos Aires: Siglo XXI, pp. 99-172.
- QUIROGA, H., 1994. *El tiempo del proceso. Conflictos y coincidencias entre políticos y militares, 1976-1983*. Rosario: Fundación Ross.
- RISLER, J., 2018. *La acción psicológica. Dictadura, inteligencia y gobierno de las emociones 1955-1981*. Buenos Aires: Editorial Tinta Limón.
- SAZ, I., 2004. Entre la hostilidad y el consentimiento. Valencia en la posguerra. En I. SAZ, *Fascismo y franquismo*. Valencia: Universitat de Valencia, pp. 171-196.
- YANUZZI, M. A., 1996. *Política y Dictadura*. Rosario: Fundación Ross.